Bucaramanga, 30 de julio de 2025.

Señor(a):

JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO)¹

E.S.D.

Referencia: Acción de tutela

Accionante: Edgar Mauricio Ramírez Calderón

Accionado: Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación y Fiscalía General de la Nación

Yo, Edgar Mauricio Ramírez Calderón, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No de Bucaramanga, Santander; actuando en nombre propio acudo respetuosamente ante su despacho para promover ACCIÓN DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos Reglamentarios 2591 de 1991 y 1983 de 2017, para que judicialmente se me conceda la protección de los derechos constitucionales fundamentales en especial al DERECHO A LA IGUALDAD, AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS, DERECHO AL TRABAJO, AL DEBIDO PROCESO Y A LA LEGALIDAD que considero vulnerados y/o amenazados por las acciones y/o omisiones cometidas por la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, dentro del Concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación -FGN 2024.

Lo anterior en base con base en los siguientes

HECHOS

PRIMERO: En el año que cursa me inscribí al concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación FGN 2024 al cargo denominado Fiscal Delegado Ante los Jueces Penales del Circuito Especializado I-102-M-01 (419) con número de inscripción 0059087, cargo para el cual se exigía una experiencia profesional de 5 años.

¹ Bajo el principio de lealtad procesal, actualmente soy un empleado de la Rama Judicial del Poder Público, por lo que considero es del caso dar aplicación al Decreto 333 de 2021, que dispone:

“8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.

Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria. En los demás casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela serán conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado”. (Negrilla fuera del texto).

SEGUNDO: Pese a cumplir con los requisitos exigidos para el cargo al cual me inscribí, fui inadmitido en dicho proceso de selección por cuanto no se me tuvo en cuenta la certificación del tiempo laborado en la Procuraduría General de la Nación del 05/06/2018 al 24/02/2022, ello en el cargo de Profesional Universitario 3PU-17, dentro cual como su nombre lo indica ejercí mi profesión de abogado, indicándose además en dicha certificación que ese cargo se regía por el Manual Específico de Funciones y Requisitos por Competencias Laborales de la Procuraduría General de la Nación, según el cual para el mencionado cargo los requisitos mínimos comprendían título profesional en derecho y 2 años de experiencia profesional o docente y tenía funciones jurídicas, tal como se puede apreciar a continuación:

TERCERO: No obstante, en respuesta dada a mi reclamación el 25 de julio de 2025 por la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación en la que se advierte que contra aquella no procede recurso alguno, se confirma mi inadmisión al concurso, toda vez que indica que la certificación expedida por la Procuraduría General de la Nación no la considera válida, porque no es posible determinar cuales fueron las funciones o actividades desarrolladas por mi ni su relación con el empleo al que me inscribí, ello a pesar del carácter nacional, constitucional y legal de la Procuraduría General de la Nación y su claridad en el manual de funciones contenido en una norma de carácter nacional que no requiere ser probada por mí, sino consultada por Juez o entidad administrativo que debe aplicarla.

Es que no es razonable ni jurídicamente viable que la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación indique lo ya referido, pues afrenta dos principios del derecho, por un lado, no puede obligarme a lo imposible, esto es, a que obtenga una certificación que una autoridad emite con referencia a una norma jurídica general de la manera en que dicha comisión desee; de otro lado, que el derecho aplicable no se prueba, pues vigente y expedida por el órgano competente debe conocerlo y aplicarlo, insisto.

CUARTO: De este modo, con la inadmisión al referido concurso la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación me vulneró los derechos reclamados, pues con ese tiempo de 3 años, 8 meses y 19 días laborados en la Procuraduría General de la Nación al sumarlos 59 meses 17 días, reconocidos por la referida comisión de mi tiempo laborado en la rama judicial, supero con creces los 5 años exigidos para al cargo al cual me inscribí en el concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación FGN 2024.

QUINTO: En este caso lo único que pido es que se me tenga en cuenta la experiencia laboral en el sector público -Procuraduría General de la Nación-, que con esfuerzo labré accediendo por mérito en carrera a dicha entidad, para así poder presentar el examen respectivo y poder competir en igualdad de condiciones con todos los participantes en un concurso dónde se están viendo vulnerados mis derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos por medio de concurso de méritos.

PRETENSIONES

PRIMERA: TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a cargos públicos, derecho al trabajo y al debido proceso, toda vez que son derechos que constituyen imperativos de orden constitucional.

SEGUNDA: Con el fin de garantizar y restablecer los derechos fundamentales mencionados anteriormente, respetuosamente solicito señor juez, ordenar a la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación darle valor como factor de experiencia a la certificación que presenté del tiempo laborado en la Procuraduría General de la Nación del 05/06/2018 al 24/02/2022; permitiéndome

continuar con la subsiguiente etapa de presentación del examen respectivo, con la modificación que resulte en la lista de participantes aprobados cuya verificación mínima de requisitos fue positiva.

TERCERO: En subsidio de lo anterior, solicito señor Juez, ordenar todo lo que considere pertinente para garantizar el restablecimiento a mis derechos mencionados anteriormente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Derecho al trabajo: Se encuentra vulnerado este derecho fundamental de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política que establece los principios mínimos fundamentales la igualdad de oportunidades. Ahora bien, el Pacto de San José de Costa Rica», ratificó el Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988; el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo, así:

[...] Artículo 7 Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo Los Estados parte en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio; d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación.. [...]»

Esta disposición citada, generan a cargo del Estado una serie de responsabilidades que se concretan en promover condiciones que permitan el acceso a un trabajo en condiciones dignas, otorgando las garantías mínimas que deben atravesar la materialización de este derecho.

2. Derecho al debido proceso: consagrado en el art 29 de la Constitución Política de Colombia: En relación con este derecho fundamental presuntamente vulnerado la jurisprudencia informa:

(...) Sentencia C-341/14 (Bogotá, D.C., 4 de junio de 2014) El derecho al debido proceso.

El debido proceso como derecho fundamental, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, y como primer elemento cabe resaltar su aplicación no solo para los juicios y procedimientos judiciales, sino también para todas las actuaciones administrativas, cuando establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas”. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la extensión del debido proceso a las actuaciones administrativas, tiene por objeto garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y extiende su cobertura al ejercicio de la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, cobijando todas sus manifestaciones , “en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y

con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses” [14]

5.3.2. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso (...)

3: Derecho a la Igualdad: Consagrado en la Constitución Política. ARTICULO 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”

4. Derecho al acceso a cargos públicos: Consagrado en el artículo 125 de la Constitución Política: “ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.”

5. En cuanto a la procedencia excepcional de la acción de tutela en el marco de concursos de méritos, frente a actos administrativos particulares y concretos, la jurisprudencia ha precisado:

“Como aspecto preliminar debe analizarse la procedibilidad de la acción de tutela en este caso, pues tratándose de un instrumento residual y subsidiario, su procedencia está supeditada a que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial, o a que existiendo aquel no resulte idóneo y eficaz para la protección de las garantías superiores transgredidas, o a que a pesar de la existencia de un mecanismo de defensa dentro del ordenamiento jurídico, la tutela se hace necesaria para evitar la consumación de un perjuicio de carácter irremediable.

En los procesos de entidades públicas que se realizan mediante concursos de méritos, la jurisprudencia constitucional ha hecho énfasis en que de manera excepcional procede la acción de amparo si se constata la violación de derechos fundamentales, toda vez que en tal evento si los medios ordinarios de defensa previstos en la ley tienen la capacidad de ofrecer una solución integral frente al menoscabo de tales garantías pero la respuesta de la Administración de Justicia no será pronta, la tutela procede como mecanismo transitorio hasta que sea resuelto el instrumento del derecho común; en cambio, si los mecanismos existentes en el ordenamiento positivo no están en posibilidad cierta de remediar de forma total la vulneración, la protección constitucional debe concederse de manera definitiva.

En ese sentido, en un pronunciamiento de reiteración jurisprudencial, la Corte Constitucional sostuvo:

"Acogiendo el mandato contenido en el artículo 6 del decreto 2591 de 1991, esta Corporación ha determinado que las acciones contencioso administrativas no consiguen en igual grado que la tutela, el amparo jurisdiccional de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados en los procesos de vinculación de servidores públicos, cuando ello se hace por concurso de méritos, pues muchas veces el agotamiento de dichas acciones implica la prolongación en el tiempo de su vulneración y no consiguen la protección del derecho a la igualdad concretamente, ya que, en la práctica, ellas tan solo consiguen una compensación económica del daño causado, la reelaboración de la lista de elegibles (cuando inconstitucionalmente se ha excluido a un aspirante o se le ha incluido en un puesto inferior al que merece) y, muchas veces, la orden tardía de nombrar a quien verdaderamente tiene el derecho de ocupar el cargo, pero sin que realmente pueda restablecerse el derecho a permanecer en él durante todo el tiempo que dura el proceso contencioso administrativo y con lo cual se ve seriamente comprometido el derecho, también fundamental, a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, en la modalidad de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos'. (T-388/98 M.P. Fabio Morón. Resaltado fuera de texto)". (CC, T-947-2012, 16 Nov. 2012, Rad. T-3.555.847)²».

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL

El Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece que el juez constitucional, cuando lo considere necesario y urgente para proteger un derecho amenazado o vulnerado "suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere". En efecto, el artículo 7° de esta normatividad señala:

"ARTICULO 7° MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. 8 La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado".

² Sentencia del 25 de julio de 2019, radicado 672155, CSJ, Sala de Casación Civil y Agraria.

LA MEDIDA PROVISIONAL CUMPLE EL REQUISITO DE NECESIDAD Y URGENCIA:

Teniendo en cuenta que, con la comunicación de los resultados a las reclamaciones ya definitivos se abre paso al respectivo examen el 24 de agosto de 2025, estoy presentando esta acción de tutela ante su despacho de forma inmediata y urgente, pues, cuando el juzgado profiera decisión de fondo, es posible que se hayan emitido actos administrativos para la siguiente fase del concurso y el daño se habría causado.

Por tal razón se hace necesario y urgente que su señoría, decrete la medida cautelar para proteger mis derechos, con fundamento en lo precedente, le ruego ORDENAR la suspensión del concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación FGN 2024. La medida provisional de suspensión de un acto concreto que presuntamente amenaza o vulnera un derecho fundamental, pretende evitar que la amenaza al derecho se convierta en violación o que la violación del derecho produzca un daño más gravoso que haga que el fallo de tutela carezca de eficacia en caso de ser amparable el derecho. Como su nombre lo indica la medida es provisional mientras se emite el fallo de tutela, lo cual significa que la medida es independiente de la decisión final.

El juez de tutela podrá adoptar la medida provisional que considere pertinente para proteger el derecho, cuando expresamente lo considere necesario y urgente. Esta es una decisión discrecional que debe ser “razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada”. Por lo tanto, le ruego la suspensión hasta tanto no se resuelva esta situación y se surta el análisis constitucional de la causa expuesta, a fin de evitar un perjuicio irremediable y salvaguardar mis derechos constitucionales.

JURAMENTO:

Bajo la gravedad del juramento, que se entiende realizado con la presentación en la secretaría de reparto del presente escrito, respetuosamente manifiesto que no he interpuesto ante ninguna otra autoridad judicial, otra acción de tutela por los mismos hechos, derechos y pretensiones.

PRUEBAS Y ANEXOS:

1. Cédula de ciudadanía.
2. Certificación Laboral de la Procuraduría General de la Nación.
3. Reclamación administrativa y su respuesta.
4. Documentos presentados como experiencia.

NOTIFICACIONES

ACCIONANTE:

ACCIONADOS:

Correo electrónico: comisioncarreraespecial@fiscalia.gov.co

Atentamente,

EDGAR MAURICIO RAMÍREZ CALDERÓN